

## ESTUDIO DE CASO 3: LA OPERACIÓN MINERA DEL EMPRESARIO LENIR PÉREZ



Concepción Gutiérrez recibió amenazas de muerte por negarse a vender su tierra a la mina Buena Vista I. © Global Witness

Situada en las colinas de Nueva Esperanza, cerca de la costa del Caribe, la mina de óxido de hierro Buena Vista I se encuentra en el centro de una larga disputa con las comunidades locales, que se han opuesto a ella y, como consecuencia, han sufrido numerosos ataques y amenazas<sup>89</sup>. La mina amenaza con alterar drásticamente el medio ambiente y la forma de vida de las aldeas que viven de la tierra<sup>90</sup>. En 2013, cuando la maquinaria minera empezó a llegar a la comunidad sin ningún tipo de consulta o aviso previos, los habitantes locales comenzaron a organizar un movimiento de protesta pacífica. Los líderes del movimiento empezaron a recibir amenazas de muerte inmediatamente por teléfono y mensajes de texto. Además, llegaron a la comunidad grupos de hombres armados que hacían disparos de advertencia al aire<sup>91</sup>.

Entre los amenazados se encontraba Concepción Gutiérrez. En julio de 2013, 12 hombres armados irrumpieron en su casa y amenazaron con matarla

por negarse a vender su tierra a la empresa<sup>92</sup>. Iban encabezados por el jefe de seguridad de Buena Vista I, Wilfredo Fúnez. Concepción, que ya había recibido numerosas amenazas de muerte, estaba por aquel entonces bajo la protección de dos observadores internacionales de derechos humanos, procedentes de Suiza y Francia respectivamente. Los asaltantes se llevaron a los observadores secuestrados; les obligaron a borrar fotografías que habían tomado de maquinaria minera en la zona y acosaron sexualmente a la observadora femenina<sup>93</sup>. Se advirtió a la comunidad de que pagarían si denunciaban los abusos a la policía<sup>94</sup>. A pesar de los intentos de silenciarla, Concepción sigue defendiendo su tierra.

### UN ASUNTO FAMILIAR

El propietario de Buena Vista I es Lenir Pérez, yerno del fallecido Miguel Facussé, uno de los empresarios más adinerados del país, cuya empresa Dinant estuvo relacionada con el polémico proyecto de Bajo Aguán (véase el recuadro «El suegro Facussé»). Pérez es militante activo del partido gobernante en Honduras y ha hecho apariciones públicas con la primera dama del país<sup>95</sup>. Sus actividades empresariales están actualmente en el candilero tras haber ganado un contrato para construir el nuevo aeropuerto internacional del país, a pesar de no tener experiencia previa de construcción de aeropuertos, según algunos comentaristas en los medios<sup>96</sup>. Hay quien afirma que el contrato por valor de 140 millones de dólares estadounidenses habría sido suficiente para construir cuatro aeropuertos de ese tamaño<sup>97</sup>.



Lenir Pérez, propietario de la polémica mina Buena Vista I, junto a la primera dama de Honduras. (imagen del Twitter de Pérez)

Pérez ha sido acusado de haber sobornado a las comunidades locales para que permitan que la mina Buena Vista I siga adelante. Se dice que alardeó de haber pagado 360.000 USD a un alcalde local del Partido Nacional, que actualmente está siendo investigado por malversación de fondos públicos, en un intento de ganarse el apoyo de la comunidad<sup>98</sup>. César Alvarenga, un respetado líder comunitario de Nueva Esperanza, afirma que Pérez le ofreció «lo que quisiera» a cambio de su apoyo a la mina<sup>99</sup>. César se negó a cooperar. Dos semanas más tarde, él recibió una amenaza anónima manuscrita «amenazándome a mí y a Roberto [otro activista comunitario], en la que decían que sabían dónde vivíamos y que debíamos dejar de protestar. Decían que, si no lo hacíamos, acabarían con nosotros», comentó a Global Witness<sup>100</sup>.

En un caso similar, un miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el grupo que organizó la oposición a la mina, dijo a Global Witness que Lenir Pérez les había ofrecido un millón de dólares estadounidenses para que cambiaran de opinión<sup>101</sup>. Los miembros del MADJ han sido seleccionados para recibir protección de emergencia por su labor en el ámbito de los derechos humanos<sup>102</sup>. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también solicitó protección de emergencia para César y Roberto tras las amenazas que recibieron.

**«Nos dijo: “Son unos mierdas. Les estoy dando electricidad [...] Habrá mucho más comercio y ¡hasta tendrán más putas!”»**

– César Alvarenga, describiendo cómo reaccionó Lenir Pérez cuando la comunidad de César se negó a dar su consentimiento a la mina de óxido de hierro en su tierra<sup>103</sup>.

**UN DESASTRE AMBIENTAL ANUNCIADO**

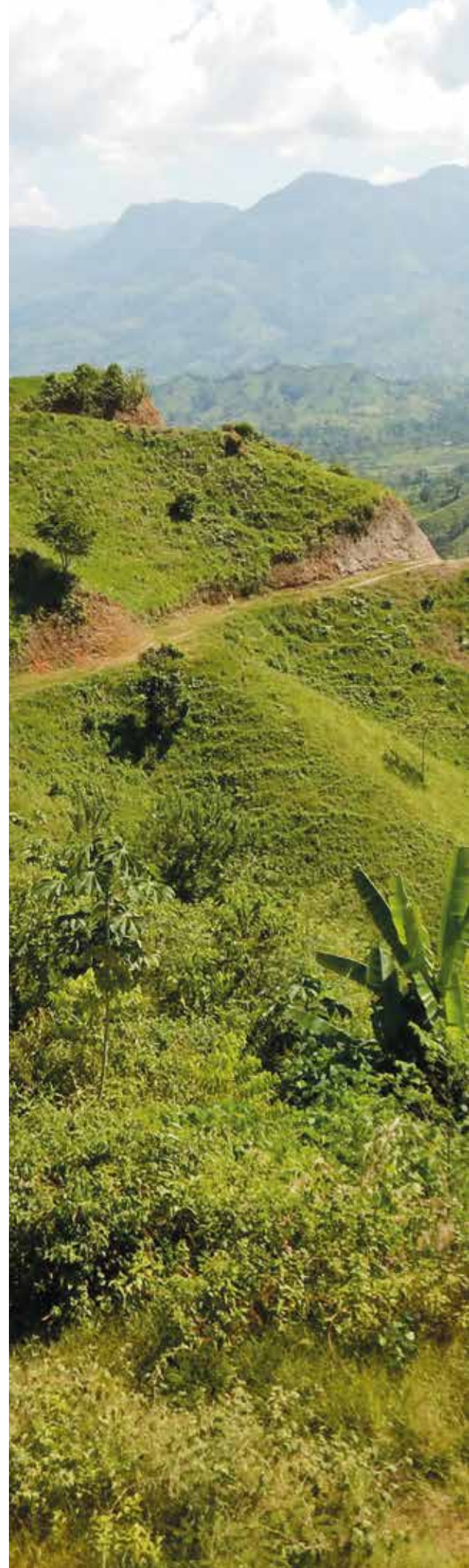
Una de las razones por las que las comunidades locales se oponían tan obstinadamente a la mina de Pérez es porque temían que el daño ambiental que iba a causar fuera irreversible. Se ha demostrado que estos temores estaban justificados. Según un informe de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) de Honduras, el suministro de agua de la comunidad se ha contaminado, los peces han desaparecido de los ríos y se ha arrasado con los árboles. En el informe se concluyó que los residuos de la minería no se estaban desechando adecuadamente y que la mina había causado desprendimientos de tierras, inundaciones y erosión del suelo<sup>104</sup>.

El hecho de que se permitiera que todo esto sucediera se explica, en parte, porque Pérez llevó a cabo una evaluación del impacto ambiental falsa, que nunca se mostró a las comunidades locales, quienes podrían haber cuestionado su veracidad<sup>105</sup>. El documento incluso contenía fotos falsas de una supuesta consulta a la población local<sup>106</sup>. La obtención del consentimiento de las comunidades que podrían haberse visto afectadas por la mina es un requisito legal, pero la empresa nunca la llevó a cabo<sup>107</sup>.

Desde entonces, la licencia de la mina se ha suspendido, pero la empresa de Pérez ha recurrido esa decisión<sup>108</sup>. Hasta la fecha, no ha saneado ninguno de los daños causados a la tierra circundante, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo<sup>109</sup>.

**LO QUE HAY QUE HACER**

Global Witness exhorta al Gobierno hondureño a cancelar inmediatamente la licencia de la mina Buena Vista I y a investigar al propietario de esta, Lenir Pérez, por supuestos sobornos, amenazas y ataques contra quienes se oponen a sus planes. El Gobierno de Honduras debe garantizar la protección de los activistas locales de Nueva Esperanza y del movimiento social MADJ, que se oponen a la mina. Se supone que muchos de estos activistas deben gozar de protección de emergencia del Gobierno, tal como solicitó la CIDH.



## EL SUEGRO FACUSSÉ: EL MAGNATE DE LA AGROINDUSTRIA ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS



Miguel Facussé, propietario de Dinant, un gigante de la agroindustria, acusado de amplios abusos de los derechos humanos. Tracy Wilkinson © 2013, Los Angeles Times. Con permiso de reproducción.

El suegro de Lenir Pérez era Miguel Facussé, uno de los empresarios más adinerados de Honduras y tío del expresidente hondureño Carlos Flores Facussé<sup>110</sup>. Antes de su muerte, a los 90 años, en junio de 2015, Facussé era el propietario de Dinant, un gigante de la agroindustria y los biocombustibles acusado de graves violaciones de derechos humanos, incluido el asesinato de muchos agricultores a pequeña escala que se oponían a las plantaciones de aceite de palma en Bajo Aguán, en el norte de Honduras<sup>111</sup>. Dinant niega rotundamente cualquier implicación directa o indirecta en tales actividades.

La lucha por los derechos sobre la tierra de Bajo Aguán entre los campesinos y los propietarios corporativos de tierras engendraron la crisis de derechos humanos más grave de Honduras de los últimos años. Global Witness verificó al menos 82 asesinatos de defensores de la tierra en Bajo Aguán entre 2010 y 2013<sup>112</sup>. Los activistas fueron asesinados en su lucha por reclamar la tierra que afirman que se les robó en acuerdos opacos con empresas de aceite de palma<sup>113</sup>. Según afirman, el ejército y la policía hondureños, así como la seguridad privada contratada por estas empresas, son responsables de una campaña de terror en la región<sup>114</sup>. El ejército hondureño niega estas acusaciones.

Estados Unidos está financiando un grupo de trabajo de policías y fiscales hondureños para que investiguen los asesinatos de Bajo Aguán. En una entrevista de Global Witness, el jefe de este grupo de trabajo desveló que se había asesinado a muchas más personas que las que se habían documentado originalmente<sup>115</sup>. Su equipo está investigando 173 casos de asesinato ocurridos entre 2010 y 2013, de los cuales 18 o 19 son de guardas de seguridad privados y seis no están relacionados con la tierra. El resto, al menos 148, se cree que fueron asesinatos de campesinos a quienes mataron en la lucha por defender su tierra.

Incluso antes de la crisis de Bajo Aguán, ya se había acusado a Miguel Facussé de encargar el asesinato de un activista ambiental, Carlos Escaleras<sup>116</sup>. En una entrevista del LA Times en 2012, comentó: «Probablemente tuviera motivos para matarlo, pero no soy un asesino»<sup>117</sup>. En 2003, un tribunal desestimó las acusaciones de que Facussé estuviera implicado en el asesinato<sup>118</sup>. También se dictó una orden de detención contra Facussé por permitir que sus operaciones vertieran toxinas en agua potable durante dos décadas. Esta orden acabó siendo revocada tras dejar su puesto la jueza que la había dictado<sup>119</sup>. Dinant niega rotundamente haber cometido delito alguno en relación con estas demandas<sup>120</sup>.

Parece ser que Facussé también pudo estar implicado en el tráfico de drogas. En un telegrama de WikiLeaks procedente de la embajada de Estados Unidos se describía el aterrizaje en una propiedad de Facussé de un avión con 1.000 kilos de cocaína procedente de Colombia en 2004<sup>121</sup>. Fuentes estadounidenses indicaron que Facussé estaba presente en la propiedad durante el incidente<sup>122</sup>. Más recientemente, un excontratista de Dinant, José Ángel Bonilla Banegas, fue detenido por usar su empresa de transporte como tapadera para llevar droga de contrabando a Guatemala<sup>123</sup>.

## HALLAZGOS PRINCIPALES

Global Witness exige una investigación, en concreto, de lo siguiente:

☛ El empresario y militante del Partido Nacional de Honduras **Lenir Pérez** por:

> Su supuesta implicación en el secuestro de dos activistas internacionales de derechos humanos. Hay testigos presenciales que afirman que Pérez llamó al jefe de su seguridad privada, Wilfredo Fúnez, cuando este secuestró a los activistas, que se encontraban en casa de la activista Concepción Gutiérrez<sup>124</sup>. Gutiérrez había recibido amenazas de muerte por negarse a vender su tierra a la empresa minera de Pérez, Empresa Minera La Victoria.

> Las alegaciones de que Pérez amenazó con matar a los activistas locales Roberto García y César Alvarenga si no convencían a su comunidad de que abandonara su oposición a la mina Buena Vista I, propiedad de su empresa llamada Empresa Minera La Victoria.

> Las alegaciones de que Pérez intentó sobornar a César Alvarenga y a un miembro del movimiento social MADJ para que dejaran de oponerse a la mina. Supuestamente, Pérez ofreció un millón de dólares estadounidenses al MADJ.

> Las alegaciones de que Pérez sobornó al exalcalde de Tela, David Zaccaro, con 360.000 USD para que creara líneas eléctricas para la comunidad de Nueva Esperanza, creyendo que así compraría el apoyo de sus miembros a su mina.

☛ La **Empresa Minera La Victoria**, propiedad de Pérez, que opera la mina Buena Vista I, por:

> No sanear el daño ambiental provocado en la comunidad de Nueva Esperanza, lo que incluye la deforestación y el hecho de que no eliminaron los residuos de la mina. La empresa estaba obligada por ley a hacerlo tras la suspensión de su licencia.

> El supuesto uso de fotografías falsas de una supuesta reunión de consulta con las comunidades locales sobre el proyecto de la mina.

☛ El exalcalde de Tela, del Partido Nacional, **David Zaccaro**, por:

> Supuestamente amenazar al activista local Roberto García por oponerse a la mina Buena Vista I.

> Supuestamente aceptar un soborno de 360.000 USD de Lenir Pérez para ganarse el apoyo de la comunidad de Nueva Esperanza a su mina, mediante la creación de redes eléctricas para ellos.

Global Witness se dirigió a Lenir Pérez y a David Zaccaro por comentarios sobre estas alegaciones pero no recibió ninguna respuesta.

